

LA CARRERA DE FONDO

Eduardo Ballón E.

El 28 de julio el ingeniero Fujimori iniciará su tercer período presidencial en un escenario bastante distinto al de sus dos mandatos anteriores. Concluida la visita de la Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, los distintos actores han asumido ya que la necesidad imperiosa de democratizar el país no se resuelve en el plazo inmediato y, por lo tanto, la perspectiva es de un conflicto de mediano plazo. Las propuestas del Canciller Axworthy y del Secretario General de la OEA dejaron insatisfechos a todos. Al gobierno, porque tuvo que oír y recibir propuestas sobre todas y cada una de sus violaciones sistemáticas al Estado de Derecho y a la Constitución; a Toledo y la oposición porque constataron, lo que era obvio, que el tema de las elecciones no formaba parte de la agenda y, por lo tanto, no se resuelve la ilegitimidad del gobierno; a la sociedad civil, finalmente, porque no tuvo un sitio cabal en las conversaciones de la Misión.

Seguramente, la única certidumbre que se llevaron los visitantes es la misma que tenemos los peruanos. Si durante buena parte de la década pasada la política nacional estuvo definida por la legitimidad y la simpatía mayoritaria por un régimen autoritario, hoy en día, la legitimidad y la propia legalidad del tercer mandato del gobierno están severamente cuestionadas y su respaldo popular está marcadamente erosionado. Dicho desgaste, sin embargo, no es atribuible fundamentalmente a los partidos políticos o a una oposición democrática, articulada y con objetivos claros. Sin negar la participación de aquéllos, es claro que la crisis de hegemonía del régimen, se ha incubado en el terreno social antes que en el político.

De ahí que los escenarios posibles, después del 28 de julio, dependerán sustantivamente de la capacidad que tenga un fenómeno social –un estado de ánimo de amplios y plurales sectores de nuestra sociedad- de convertirse en un fenómeno político; es decir, con capacidad de llevar a soluciones democráticas y modificar sustancialmente la situación actual.

La crisis de la hegemonía fujimorista

Resulta innegable que el gobierno asumirá su tercer período en un

escenario polarizado. Cuatro elementos marcan claramente las diferencias con los períodos anteriores y explican la crisis de la hegemonía fujimorista.

El primero de ellos, sin duda, es la importante y persistente movilización social contra el régimen. La misma, que contribuyó a forzar la segunda vuelta electoral, expresa en la calle el descontento de sectores significativos y relativamente organizados de la sociedad, entre los que destaca la participación generosa y activa de los jóvenes y las mujeres, cuyos colectivos son los más visibles. Se trata de una movilización plural que tiene, por primera vez en las últimas décadas, un fuerte contenido ético de reivindicación de la democracia, que hace que sus demandas resulten irreductibles.

El segundo elemento distinto es el de la opinión internacional, claramente desfavorable al fujimorismo en esta ocasión. Más allá del tono tibio de la Misión de la OEA y de la interesada cautela de la diplomacia mundial, es indudable que el fujimorismo que es visto con incomodidad y está aislado internacionalmente; difícilmente podrá remontar esta situación. Es más, de persistir en sus posturas, no debe sorprender la aplicación de sanciones de distinto tipo, particularmente del gobierno norteamericano, que dificultarían aún más el panorama económico del país.

La tercera diferencia está referida al contexto económico, marcado claramente por la recesión y la retracción de la inversión. La inminente alza de los combustibles y el «sinceramiento» del PBI, así como la desconfianza que genera en el capital transnacional la situación del país, permiten avizorar tiempos difíciles en esta materia. Peor aún, cuando el gobierno seguramente tendrá que responder a una clientela electoral que demandará el cumplimiento de sus distintas promesas.

Finalmente, y a pesar de tener ya mayoría parlamentaria gracias a sus recientes «adquisiciones», es claro que el gobierno puede enfrentarse a dificultades crecientes para manejar al Congreso como lo ha hecho en los últimos años. Por lo demás, la presencia de figuras tan disímiles como Francisco Tudela y Absalón Vásquez, ambos con una voluntad protagónica ya demostrada, permite prever posibles conflictos en los sectores más visibles del fujimorismo.

Toledo y la oposición

Alejandro Toledo, que encabezó la denuncia del fraude electoral tiene hoy varios desafíos si quiere, como todo parece indicarlo, convertirse en la cabeza de la lucha por la democracia que se ha abierto en el país. Ello supone entender que el deterioro que vive el régimen político es consecuencia de un estado de ánimo que se explica por la crisis económica, pero también por una percepción creciente que asocia esta crisis al autoritarismo. La preocupación que hoy muestran importantes sectores de la sociedad por el futuro de la democracia, refleja también una preocupación que tienen por el centralismo, el desempleo, la pobreza, la recesión, etc.

En otras palabras, Toledo y los partidos de oposición tienen la obligación de demostrarle a la sociedad una capacidad de propuesta que vaya más allá del Acuerdo de Gobernabilidad que suscribieran a inicios del año, y que permita que la movilización social adquiera un sentido más amplio.

Adicionalmente, y dado que el descontento es antes que nada un fenómeno social se ve en la necesidad de ligarse a éste, de reconocer a las organizaciones que vienen protestando espontáneamente, convocándolas y haciéndolas participar de un solo movimiento. Como es obvio, en este proceso debe resolver su vinculación con los partidos políticos opositores, que no puede limitarse, como hasta ahora, a la aparición conjunta en algunas manifestaciones. A fin de cuentas, para que el descontento devenga en un proceso de acumulación de fuerzas opositoras, debe ser organizado por los partidos democráticos.

Ambos desafíos son grandes. Más aún si aceptamos, además de la espontaneidad de la movilización social, las debilidades de la sociedad civil en términos de su fragmentación y su marcada desconfianza en la política y los políticos. Es claro, sin embargo, que de no resolverse ambos temas, las posibilidades de hacer frente al régimen serán muy limitadas.

La marcha de los Cuatro Suyos vs. la Comisión de Democratización

En este contexto, el gobierno y la oposición han empezado a jugar las cartas de sus respectivas estrategias. El primero tiene en la Comisión de Democratización el instrumento a través del cual pretende dar la imagen de una voluntad de diálogo que es negada

cotidianamente por los principales voceros gubernamentales. Dicha Comisión, nombrada anticipándose a la visita de la OEA, más allá de la visibilidad adquirida en los medios de comunicación, carece de credibilidad y no ha logrado despertar el entusiasmo, ni siquiera de los opositores más tibios.

Toledo y la oposición, por su parte, han convocado a la marcha de Los Cuatro Suyos para el 26 de julio. Con ella pretenden que la movilización social del país evidencie aún más las difíciles condiciones políticas y de ilegitimidad con las que el ingeniero Fujimori asumirá su tercer período de gobierno. Se trata, sin duda, de una apuesta bastante alta ya que las posibilidades subsecuentes de su estrategia dependen de un resultado exitoso en este esfuerzo.

Los próximos días estarán marcados por esta pugna. En ella, las posibilidades gubernamentales de lograr una imagen dialogante y dar alguna credibilidad a la Comisión de Democratización están severamente limitadas por la necesidad que simultáneamente tiene de mostrar fuerza y cohesión. Las posibilidades de la oposición de lograr éxito en la marcha de Los Cuatro Suyos, por su parte, pasan por avanzar en la resolución del severo divorcio que se mantiene entre la sociedad y la política en nuestro país.

El escenario futuro

Así las cosas, el escenario del país post 28 de julio dependerá en gran medida de las próximas semanas. Si la marcha es exitosa y la nueva juramentación del gobierno se produce en un contexto de aislamiento y protesta, se incrementará el deterioro político del régimen autoritario y se configurarán mejores condiciones para una salida realmente negociada de la crisis.

Por el contrario, si aquella fracasa y el gobierno consigue romper su imagen de aislamiento, fortalecerá su posición y, eventualmente, la condena internacional al país puede empezar a amenguar. Ello no supondrá resolver los temas de legalidad y legitimidad del régimen político, pero sabemos bien que éstas son preocupaciones menores para quienes nos gobiernan.

Como no ocurría hace décadas en la historia del país, la calle tendrá un rol definitorio en la situación actual.